

## CAPÍTULO 9

---

# De la confrontación a la Concertación: la producción nacional y el reconocimiento internacional de los nuevos universales

**E**l golpe militar de Augusto Pinochet en 1973 posee una importancia particular en el desarrollo y en la legitimación de las nuevas técnicas y conocimientos estatales especializados. Chile fue un laboratorio en donde los contrincantes del Norte –quienes estaban orientados hacia la obtención de la legitimidad de dichas técnicas y conocimientos– invirtieron una gran cantidad de esfuerzos y recursos, bien fuera a través del socialismo democrático o mediante el modelo económico liberal. Por lo tanto, lo que ocurrió en Chile tuvo un impacto directo en los debates suscitados en los medios, en las universidades y en los centros de investigación más destacados. El *Wall Street Journal*, por ejemplo, logró pregonar el supuesto éxito de los economistas chilenos formados en Chicago como una razón para concederle una autoridad mayor a la economía de Chicago en los Estados Unidos (y en otras partes). El *New York Times* logró emprender una reacción en el campo de los derechos humanos, de nuevo enfatizando el caso chileno. Así, las luchas en Chile no sólo fueron internacionalizadas sino que también se convirtieron en un punto central para definir cómo tendría que ser un Estado internacionalmente legítimo. Lo que ocurrió en el laboratorio chileno –escrito por las tintas simultáneas del Norte y del Sur– se convirtió en el modelo de exportación hacia otras partes del mundo. Esto fue cierto tanto en relación con los derechos humanos como con la economía neoliberal.

En este capítulo comenzaremos describiendo el modo como la interacción de las luchas nacionales y las inversiones de esfuerzos y recursos internacionales, finalmente acabaron produciendo la Concertación de Partidos para la Democracia (una alianza de partidos políticos de centro-derecha), y con ello la configuración de Chile como un modelo internacional de “democracia liberal”. De nuevo se trata de la historia de una fuerte inversión extranjera en los centros de investigación más destacados, así como de un nuevo tipo de lenguaje estatal inspirado en el modelo de los Estados Uni-

dos. Los centros de investigación de punta, financiados por capital extranjero, a la larga lograron unirse alrededor del referendo celebrado al final de la década de los 80. De manera poco sorprendente, la lucha por el referendo fue emprendida en términos desarrollados por consultores estadounidenses que lideraban “la campaña por el No a Pinochet” (Purveyar 1994). El triunfo de la campaña hizo que Pinochet fuera removido de su cargo en el Gobierno, mas no de las múltiples fuentes que alimentaban su poder.

Como puntos de contraste, en este capítulo también se examinarán brevemente los acontecimientos paralelos pero bastante divergentes de las realidades brasileña y argentina. En Brasil, la historia del estamento militar fue más compleja. El economista dirigente fue Delfim Netto, quien, como fue señalado, no era un Chicago Boy, y de igual forma el modelo económico del régimen militar era más nacionalista. En contraste con Chile, la inversión internacional estaba conectada con un paisaje nacional que presentaba muchos más matices, incluso dentro del seno militar. Por eso, casi de forma inmediata al ascenso al poder de los militares de línea dura a finales de los años 60, es posible constatar una reagrupación de “notables” pertenecientes al establecimiento jurídico brasileño alrededor de la iglesia católica y de las comisiones de paz y justicia. Incluso los mismos sujetos lograron utilizar la OAB —el gremio de abogados brasileños— para erigir cargos en contra del régimen militar. Así, en lugar de la injerencia de una firma consultora estadounidense encargada de conducir el referendo, podemos observar una comisión de notables mucho más local, responsable de gestar un nuevo orden constitucional para la transición del Brasil. Luego de la discusión sobre Brasil, ofreceremos una breve descripción de las luchas por los derechos humanos en Argentina, emprendidas casi en su totalidad en escenarios internacionales. De manera consistente con lo que ya podría esperarse, las inversiones de esfuerzos y recursos profesionales de ambos lados —desde y hacia la Argentina— encontraron su válvula principal de salida en la esfera internacional.

Las diferentes estructuras y escenarios con los que la inversión internacional fue absorbida en los tres ejemplos de este capítulo, hace que de nuevo sea tentador yuxtaponer los modelos nacionales con los internacionales, quizás alineando Chile y Argentina hacia el costado internacional y a Brasil en el nacional. Pero este análisis sería bastante engañoso. Evidentemente, el regreso de los notables en el Brasil fue respaldado completamente por la administración Carter, la Fundación Ford y muchas otras fuentes de capital y de legitimidad localizadas internacionalmente. Y aún más importante, el factor clave de lo que ocurrió con la inversión internacional en Brasil y en Chile fue la instancia homóloga de la relación entre el Norte y el Sur. En buena medida no es que Chile fuera una marioneta que reflejara llanamente las fuerzas internacionales, sino que, mejor, los mis-

mos elementos chilenos que produjeron el éxito de los Chicago Boys –un patrón de estructuras que incluía a *El Mercurio* como el correlato del *Wall Street Journal*, las “pirañas” como la instancia análoga al Citibank y finalmente la Universidad Católica como la extensión de la Universidad de Chicago– también pueden ser constatados con un ropaje diferente detrás del movimiento de los derechos humanos, en este caso mediante un establecimiento reformista que se encontraba afuera del poder. En Brasil, en cambio, no se dio este tipo de grupos visibles vinculados con estrategias internacionales particulares.

Sin embargo, esto no significa que no existan paralelos estrechos que también puedan ser constatados entre Brasil y Argentina. Delfim Netto puede ser asumido como el vocero de la comunidad de negocios de São Paulo, que estaba enfrentada a la élite cosmopolita de Río de Janeiro. De igual forma la creación del IEERRAL en Córdoba, de donde surgió Domingo Cavallo, fue también parte de un ataque regional en contra del pensamiento central que no representaba sus intereses. Ambas situaciones facilitaron la aparición de razones estructurales que aconsejaban la adopción de nuevas técnicas y conocimientos especializados aptos para ser puestos en marcha en beneficio de ciertos objetivos regionales. Igualmente el retorno de los notables en el Brasil, que se forjó tras el lenguaje de los derechos humanos, guarda muchos paralelos con lo que ocurrió en Chile. Lo diferente es que en la realidad brasileña –casi a la altura en que las personas de la línea dura asumieron el poder– ellos rápidamente pudieron tomar ventaja de las instituciones locales que no necesitaron ser construidas de nuevo.

## LOS GRADUADOS DE CHICAGO AL SERVICIO DE PINOCHET: UNA ALIANZA CONTRARREVOLUCIONARIA DE ECONOMISTAS, FINANCIEROS Y PISTOLEROS

Los nuevos conocimientos estatales especializados de la contrarrevolución de Pinochet empezaron a tener lugar gracias a los economistas que vendrían a ser conocidos tiempo más tarde como los primeros y los más famosos Chicago Boys de Latinoamérica: los jóvenes economistas de la Universidad Católica. De un modo relativamente precoz, estos economistas extendieron vínculos con el sector empresarial (Valdés 1995, 225), con el estamento militar y con los partidos políticos de tendencia conservadora quienes ya estaban planteando diversos desafíos al Estado grande. Una institución determinante para la configuración de estas redes fue *El Mercurio*, el periódico más importante de Santiago y casi siempre referido como el *Wall Street Journal* de Chile. *El Mercurio* era de propiedad de los Edwards, quienes representaban un poderoso grupo económico y una fuer-

za de tipo conservador que logró jugar un papel bastante similar al desempeñado por el Citibank en los Estados Unidos. Otra institución de bastante influencia fue un centro de investigaciones destacado en materia económica (el Centro de Estudios Sociales y Económicos), creado en 1963 por el grupo Edwards. *El Mercurio*, por su parte, se convirtió en el oponente más visible de las políticas de Allende, al igual que en el principal promotor de la liberalización económica<sup>1</sup>.

Como ha sido narrado en varias descripciones que dan cuenta de las circunstancias que precipitaron el golpe militar de 1973, el “Club de los Lunes” —que se reunía cada semana, como su nombre lo sugiere— se convirtió en el vehículo cardinal para planificar y movilizar la oposición al gobierno de Allende. Estas reuniones sirvieron para integrar, entre otras personas, al editor de *El Mercurio*, a diferentes líderes del grupo Edwards, así como a otro grupo sobresaliente, el Banco Hipotecario de Chile (BHC). Bajo el contexto del Club de los Lunes los grupos financieros más importantes empezaron a recurrir a sus colegas economistas, con el objeto de producir un proyecto detallado del modelo económico que se llegaría a implementar luego de que el poder militar asumiera el poder. Ocho de las diez personas que participaron activamente en la creación del documento tenían títulos de posgrado en economía de la Universidad de Chicago (Silva 1996, 74).

Entre 1973 y 1975 el régimen militar se caracterizó por medidas relativamente graduales en materia económica. Pero luego los radicales se impusieron (Agencia Latinoamericana 1983; Silva 1996; Valdés 1995). La crisis del petróleo ayudó a precipitar este cambio, volviendo más significativo el clamor de aquellos que exigían medidas de choque. También fueron cruciales los vínculos creados entre los conglomerados más grandes, incluyendo al BHC, que ahora mantenían una política agresiva de empleo de los Chicago Boys más radicales y una férrea orientación internacional. Así, las instituciones clave del gobierno de Pinochet fueron controladas por los radicales, especialmente por la Oficina Nacional de Planificación (Odeplan, diseñada por Miguel Kast), el Banco Central (Silva 1996, 107) y por supuesto las conexiones internacionales con los economistas prestigiosos de la Universidad de Chicago<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Arturo Fontaine, quien había sido abogado y profesor de derecho económico y posteriormente se convirtió en el editor de *El Mercurio*, también era bastante cercano a los economistas de la Católica. Incluso dos de sus hijos se hicieron economistas, y uno de ellos estudió en Chicago. También resulta interesante destacar que el mayor simpatizante de los doctores antiinflación de la Misión Klein Saks de 1955-1958 (Drake 1994) fue justamente *El Mercurio*.

<sup>2</sup> El BHC era conocido como “la piraña”, debido a su actitud agresiva en el modo como asumía los negocios. Según Silva, “en 1974, dos tercios de las 18 compañías del BHC se orientaban a la banca, la inversión y los seguros, mientras 10 de ellas consistían en empresas de comercio ... los activos líquidos del BHC hicieron que le fuera relativamente fácil ajustarse a una liberalización

El BHC organizó una conferencia de gran envergadura a comienzos de 1975 en Santiago, en donde Arnold Harberger y Milton Friedman argumentaron en favor de medidas de choque para abrir la economía y detener la inflación (Silva 1996, 101; *ver* Friedman y Friedman 1998). El símbolo de la preeminencia del grupo de los radicales de Chicago lo constituyó el nombramiento de Sergei de Castro, un amigo cercano de Cruzat del BHC, como ministro de Hacienda. A estas alturas, la versión neoliberal de los Chicago Boys dominaba el impulso de reestructuración de la economía chilena, predominio que se extendió hasta la crisis de la deuda en 1982 – que resaltó el perfil de Cruzat, entre otros<sup>3</sup>.

De hecho, en diversos aspectos es posible constatar el descenso del viejo orden jurídico como consecuencia de la configuración de nuevos canales de entrada más meritocráticos, de la presencia de conexiones vitales entre las viejas familias, el Estado y los negocios, así como de la existencia de vínculos forjados a través de una ideología económica compartida, de instituciones nacionales y de estudios realizados en el exterior, todo lo cual facilitó a los gestores del cambio radical el pegante y la capacidad suficiente para emprender su cometido. Al ocupar todas las instituciones importantes que resultaron vigorizadas con el discurso económico moderno, los nuevos actores lograron derrocar tanto al desacreditado Estado desarrollista como a aquellos cuyos privilegios provenían solamente de su filiación con las viejas familias y con las oligarquías jurídicas. Este grupo se basó en su propuesta de cambio económico, en los conocimientos matemáticos y en las conexiones internacionales que le daban credibilidad. Sus miembros no prestaron mucha atención a la credibilidad que el derecho les pudiera facilitar. El control del Estado por parte de Pinochet estaba respaldado

---

rápida del comercio en contraste con los conglomerados más tradicionales. Asimismo, una apertura más rápida del comercio exterior facilitó la expansión de los conglomerados en detrimento de los otros grupos económicos" (1996, 73). Los dos principales dirigentes del BHC, Javier Vial y el abogado Ricardo Claro, contrataron en 1966 a Manuel Cruzat, uno de los graduados más brillantes de Chicago, y así el BHC se convirtió en uno de los primeros grupos de Chile en contratar economistas para asumir un enfoque más agresivo y más financiero (Osorio y Cabezas 1995, 58). Valdés observa que Cruzat despachó a "todos los viejos" que trabajaban en el Banco, promovió la venta de la propiedad inmueble y ayudó a orquestar la compra de diversas empresas chilenas. Para 1970 esta institución se había convertido en el tercer o cuarto grupo más grande de Chile (1995, 229). Cruzat, luego del golpe militar, conformó el grupo Cruzat-Larrain con su primo Fernando Larrain, ayudando así a la transformación, según Laura Hasting, de las familias a "los grupos de empresarios" (Hasting 1983, 214).

<sup>3</sup> De acuerdo con un abogado que trabajó en un banco internacional a finales de la década de los 70 y principios de los 80, "los bancos contaban con bastante dinero" y "los requisitos [para adquirir préstamos] estaban siendo cada día más flexibles". Al mismo tiempo, los grupos económicos más importantes controlaban las entidades financieras, facilitando incluso que grupos tales como Cruzat-Larrain adquirieran nuevos negocios, así como las inmensas deudas que quebraron a diversas empresas cuando la crisis tuvo lugar. La tasa de cambio, que había permanecido fija, de repente se dobló, haciendo que los préstamos en dólares fueran virtualmente imposibles de pagar.

principalmente por la violencia, que era acompañada por algunos rituales jurídicos y una fachada republicana. En este contexto, el éxito económico fue un factor central de legitimidad en favor del Gobierno (Silva 1991, 395).

Aun cuando el gobierno de Pinochet no dedicó muchos esfuerzos al área del derecho o a las instituciones jurídicas, los abogados no fueron totalmente excluidos. En primer lugar, muchos de ellos le dieron su bendición al nuevo gobierno. En efecto, el sector judicial y la vieja élite jurídica recibieron con un abrazo de bienvenida el golpe militar, esperando entre otras cosas volver a los mejores viejos tiempos en donde podían imponer su saber y valores propios. Varios jueces de la Corte Suprema, incluyendo abogados prestigiosos, abandonaron el ejercicio cabal de sus funciones para apoyar al régimen militar, el cual estaba conformado por personas que compartían la misma trayectoria social de aquellos que para entonces ocupaban la mayoría de plazas en la judicatura. Uno de los jueces de la Corte Suprema, citado por Constable y Valenzuela (1991, 117), “manifestó su ‘encanto’ ante la promesa del estamento militar de ‘respetar y hacer cumplir’ las decisiones judiciales”. Muchos abogados y jueces, por su parte, expresaron su agrado por el hecho de que, como otro juez de la Corte Suprema lo había señalado, “el gobierno actual jamás ha irrespetado a los juzgados ni a las cortes” (José María Eyzaguirre, citado por Constable y Valenzuela 1991). Reconociendo hábilmente que el sector judicial había alcanzado el punto en que su principal preocupación era intentar mantener los valores de la vieja aristocracia, Pinochet “rindió un acucioso homenaje a la dignidad y el prestigio de la judicatura” (Constable y Valenzuela 1991).

## LA INVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: LA VICARÍA COMO LABORATORIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Chile ocupa un lugar central en el desarrollo del movimiento internacional de los derechos humanos (*ver* Keck y Sikkink 1998, 88-92). En el momento del golpe militar (1973) el tema de la legalidad no era un asunto clave. Los abogados, como fue anotado, apoyaron en su mayoría el golpe, y así no había un discurso o un movimiento autónomo de derechos humanos que permitiera a los abogados tomar distancia de la coyuntura política. Por ejemplo, una iniciativa que circuló en contra de la toma militar del poder en 1973, según uno de los signatarios, sólo obtuvo el respaldo de doce firmas, entre ellas las de Jaime Castillo, Francisco Cumplido y Eugenio Velasco —este último asociado con el movimiento de derecho y desarrollo. Así, el comienzo de la actividad en materia de derechos humanos se dio primordialmente a partir de una alianza entre políticos de oposición, especialmente los demócrata-cristianos junto con la Iglesia, la cual aún mantenía

un rescoldo del pensamiento católico social progresista (*ver*, en general, Zinder 1995). Como lo indicó uno de los observadores, “sólo las iglesias resistieron para ofrecer algún tipo de sombra protectora”. Según otro observador, la judicatura “no importaba”; ellos sólo servían como “tapetes de entrada”.

Algunos obispos, liderados por el padre Salas, se unieron a un grupo de abogados y activistas en la creación de un Comité de Paz, el cual a su vez conformó una división jurídica, dirigida inicialmente por José Zalaquett. Muy pronto Zalaquett fue arrestado y retenido por seis semanas. Hacia marzo y abril de 1974, el Gobierno estaba realizando desapariciones como mecanismo para deshacerse de aquellos que eran percibidos como enemigos, especialmente en sindicatos, partidos políticos y universidades. El triunfo relativo del movimiento internacional de los derechos humanos, descrito más adelante, llevó a que la época de represión más cruda en Chile finalizara en 1978, cuando la fuerza secreta de policía (la Dirección Nacional de Inteligencia) fue desmantelada<sup>4</sup>. Pinochet continuaría en el gobierno durante la década de los 80, pero no con el mismo grado de terror que hasta entonces se había ejercido.

El movimiento de los derechos humanos en Chile surgió como una alianza entre estudiantes de derecho, abogados e iglesias, que contaban con el respaldo del Consejo Mundial de Congregaciones, el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, algunos recursos provenientes de Europa y una creciente presión internacional. La división jurídica del Comité de Paz, que muy pronto creció hasta alcanzar un número de 75 personas, se sirvió de la desacreditada pero no obstante existente tradición jurídica para obtener apoyo, y así adelantó recursos de habeas corpus en todos los casos posibles y del mismo modo ayudó a facilitar abogados de defensa en los tribunales militares. Como afirmó uno de los activistas, algunos sujetos preguntaban “en un comienzo” si de esa forma ellos estaban “legitimando el sistema” al utilizar los juzgados, pero el caso es que “no contábamos con otro tipo de foros”. Si bien los juzgados fallaban a favor del detenido por mucho en dos o tres ocasiones, lo cierto es que estas decisiones también servían para perseguir ciertos “objetivos conexos”.

El Comité de Paz sacó provecho del papel pasivo propio de los jueces. Con la pretensión de mantenerse ajenos al desarrollo de los acontecimientos políticos, los juzgados simplemente empezaron a mandar notas al Gobierno cada vez que era instaurada una demanda alegando por la retención de una persona. Si el Gobierno respondía, la parte demandante sabía que “no había riesgo de muerte”, según uno de los activistas, pero si nunca se

<sup>4</sup> Y Pinochet decretó la amnistía para todas las violaciones excepto para el asesinato de Letelier, el cual fue eximido por presiones provenientes de los Estados Unidos.

sabía nada “por parte del Gobierno”, entonces había que “activar las alarmas”. Ya que Chile había sido una plaza de debate y de preocupación internacional en la época de Allende y la transición democrática hacia el socialismo, el país se mantuvo en los estrados principales de los medios de comunicación. La documentación legal hasta entonces compilada ayudó a que los activistas movilizaran, de acuerdo con otro protagonista, al “*Le Monde*, *Time*, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional” y otro tipo de instituciones “que llegaban día tras día”. Así, la atención prestada facilitó la internacionalización de las estrategias empleadas por los activistas.

Como señaló uno de los activistas de ese entonces, “Chile era noticia”. Los reporteros del *New York Times* venían a Santiago “cada semana”. Chile era percibido como “el caso caliente del momento”, ya que las variables allí inmersas encajaban perfectamente en los debates y en las divisiones producto de la Guerra Fría en los Estados Unidos (ver capítulo 8). A través de estas conexiones internacionales, la gente del Comité de Paz muy pronto conoció de la existencia de Amnistía Internacional —que para entonces apenas estaba forjando su credibilidad—, de la Comisión Internacional de Juristas, de la Organización de los Estados Americanos y de los instrumentos internacionales para los derechos humanos que habían sido creados bajo el auspicio de las Naciones Unidas, los cuales, en ciertos casos, apenas estaban siendo adoptados. Según uno de los participantes en estas actividades, si bien al comienzo de la resistencia al golpe militar los abogados hablaban acerca de “la Constitución” o de los “derechos del defendido”, en pocos meses ellos empezaron a referirse a los “derechos humanos” y buscaron, por primera vez, activar sistemáticamente el armazón ofrecido por las Naciones Unidas. La campaña de Jimmy Carter en 1975, que se había servido de los debates adelantados en Washington con motivo del golpe militar chileno, también ayudó a que los derechos humanos se convirtieran en materia de controversia<sup>5</sup>.

No obstante, esto no significa que el movimiento de los derechos humanos hubiera logrado ganarse una legitimidad temprana al interior de Chile. En efecto, el Comité de Paz fue desmantelado por Pinochet en 1975, y el mismo tuvo que abrigarse bajo la sombra protectora de la iglesia católica —conformando así la *Vicaría*— para mantenerse vivo. Pero en últimas, Pinochet y su gobierno se vieron forzados a reconocerle legitimidad a lo que vendría a configurarse como el movimiento internacional de los derechos humanos.

---

<sup>5</sup> Uno de los congresistas de ese entonces manifestó que la legislación de los derechos humanos que precedió la elección de Carter y que le ayudó a ganar la atención del público, “fue adoptada debido a que en el Congreso estábamos bastante, bastante molestos con el Gobierno, particularmente luego de que quedó claro que la administración Nixon había desestabilizado el régimen ... del presidente Allende en Chile”.



Algo de la dinámica de transformación sufrida en Chile y en otras partes puede ser constatada en la historia de José Zalaquett, uno de los líderes chilenos más famosos en materia de derechos humanos. Él se graduó en la facultad de derecho en 1967 y luego se convirtió en profesor de derecho y en abogado defensor en asuntos penales. Estas actividades estaban dentro de la trayectoria asociada con la vieja élite jurídica, pero, como otros pocos abogados que se encontraban en la orilla progresista del derecho, Zalaquett también trabajó brevemente en la reforma agraria promovida por el gobierno de Allende. Fue un demócrata-cristiano que guardaba vínculos con el ala progresista del pensamiento católico. De forma inmediata al golpe militar formó parte del Comité de Paz, que para entonces mantenía, primordialmente, una valencia de orden “político”. Entre aquellos que respaldaron al Comité de Paz, sólo dos eran abogados de tendencia relativamente conservadora y unos pocos eran demócrata-cristianos, que de hecho se habían opuesto al gobierno de Allende. La mayoría –descritos por Zalaquett de acuerdo con una persona cercana a él– “habían simpatizado con la administración de Allende”, e hicieron parte del Comité de Paz como una manera de salvar a algunos “compañeros que habían sido encarcelados”. Su esfuerzo, como lo describió uno de sus miembros, era parte “de una empresa humanitaria jalonada por un comité político que había sufrido un revés”. Como lo señaló otro miembro del Comité, los abogados que “eran de izquierda e inspirados por causas políticas”, empezaron “a emplear herramientas profesionales”, para así convertir la política en derecho. Esta actividad empezó a generar su propia dinámica cuando comenzó “a calar la idea de que ciertos valores” tenían fuerza “universal”, lo cual quiere decir que los mismos empezaron a gozar de un vasto apoyo internacional.

Por lo tanto, no resulta sorprendente que José Zalaquett, una vez expulsado en 1976 luego de su segundo arresto, se fuera a trabajar a Amnistía Internacional, que para entonces aún no hacía parte de la corriente principal en el contexto internacional. Allí él se convirtió en miembro de la junta de la división estadounidense en 1977 (el año en que Amnistía obtuvo el Premio Nobel de la Paz), luego formó parte del Comité Ejecutivo Internacional en 1978 y finalmente fue nombrado como presidente en 1979. Debido a estas actividades, se convirtió en la primera persona no estadounidense en ganar uno de los galardones a los “genios” otorgados por la Fundación MacArthur<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Al interior de Chile, también debe ser dicho, pocos de los abogados que fueron identificados con la oposición realizada en contra de Allende se convirtieron posteriormente en actores importantes para la evolución de las actividades relacionadas con los derechos humanos. Algunas de estas personas, como podría esperarse, tenían vínculos con el movimiento de derecho y desarrollo, tales como Eugenio Velasco y Gonzalo Figueroa. Y otros, incluyendo especialmente a Jaime Castillo, guardaban nexos con los demócrata-cristianos. Castillo había sido ministro de Justicia en

El desarrollo y la universalización de la actividad en materia de derechos humanos logró un alto grado de aceleración con la gestión de las grandes organizaciones filantrópicas, especialmente la Fundación Ford. En Chile, como en Brasil, la inversión de esfuerzos y recursos de las fundaciones en derechos humanos sólo se dio como resultado de pasadas inversiones que se habían suscitado en torno al ámbito de las ciencias sociales<sup>7</sup>. Aprovechando una lectura similar que había surgido de la experiencia brasileña pocos años antes, la gente de la Fundación Ford en Chile se preguntó, “¿qué podemos hacer en un régimen represivo?”; la Vicaría, al menos en principio, “no se ajusta a nuestro programa”. La oficina de la Fundación Ford en Santiago vio la necesidad de “tomar distancia” frente a Pinochet, mas “no sabía qué debía hacer” en materia de derechos humanos. Pero el enfoque amplio que para entonces se había desarrollado en el seno de las ciencias sociales, hizo del escenario chileno un terreno fértil para la aparición de programas internacionales dirigidos sustancialmente al campo de los derechos humanos. El intento de la Fundación por obtener neutralidad en el ámbito de las ciencias sociales no fue muy diferente de lo que en la esfera del derecho vendrían a ser los derechos humanos. No obstante, al comienzo, la Fundación le huyó al discurso de los derechos humanos, ya que probablemente aún guardaba una conexión demasiado estrecha con las contiendas políticas.

Para avanzar un poco en esta historia, luego de los primeros años del régimen de Pinochet, la pregunta de la Fundación acerca de la Vicaría y de

---

el gobierno de Frei. Jose Luis Cea, otro ejemplo, fue un abogado graduado en los años 60, quien luego se convirtió en profesor de derecho constitucional en la Universidad de Chile al final de esa década (así como asesor jurídico de aquellos que redactaron los borradores de la reforma constitucional de 1967). Además, publicó un libro en 1971 acerca de la teoría de la libertad de expresión, basándose en John Stuart Mill y otros autores. En ese entonces, *El Mercurio* elogió el libro al trasluz del “peligro” que revestían las dictaduras comunistas. Algunos otros cercanos al gobierno de Allende criticaron su “discurso burgués”. No obstante, después del golpe, el libro fue prohibido, e incluso Cea perdió por un tiempo su posición como profesor debido a que “hablaba acerca de principios generales” que eran contrarios al querer del régimen. El nexo entre las preocupaciones por los derechos humanos y la línea de derecho y desarrollo también es sugerida por el hecho de que Cea cursó un programa de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Uno de los funcionarios de la Fundación Ford de ese entonces –en cierta forma opuesto a Gardner (1980)– sugirió que pudo haber existido un vínculo entre el Proyecto Chile en Derecho y algunos pocos abogados del establecimiento que habían escogido estudiar el campo de los derechos humanos. Luis Bates provee otro nexo entre la línea de derecho y desarrollo y una posición más cercana con los derechos humanos en comparación con aquella de los abogados chilenos tradicionales. De hecho, tiempo más tarde, Bates fue el fiscal encargado de investigar el asesinato de Letelier.

<sup>7</sup> Como uno de los funcionarios de la Fundación Ford lo manifestó, la supervivencia económica de las ciencias sociales, más que la del derecho, se vio amenazada por el gobierno militar. Los abogados tenían “un mercado de trabajo diferente”, ya que lograron seguir ejerciendo “el derecho de los negocios, el derecho comercial y el derecho penal” a pesar del golpe militar. No obstante, también es cierto que las inversiones pasadas de esfuerzos y recursos en favor del derecho no habían generado dividendos significativos.

otras entidades pasó a ser la siguiente, de nuevo, de acuerdo con uno de los funcionarios de ese entonces: “¿cómo podemos hacer esto sin involucrarnos en política?”. En otras palabras, “¿es esta una actividad en favor de los derechos humanos o una actividad política partidista?”. La documentación prolífica de la Vicaría –“la gente pudo recabar datos empíricos”– impresionó a los delegados de la Fundación Ford cuando visitaron a Santiago. “No sólo se trataba de gritones” sino de personas “curiosamente legalistas”.

Para finales de los años 70, según uno de los funcionarios de la Ford que laboraba en esa época, “el modelo había sido implementado” y “funcionaba en Chile”. La Ford entonces vislumbró y fomentó la creación de “redes internacionales que pudieran llegar a auxiliarse mutuamente” en materia de derechos humanos. Asimismo, la Ford desarrolló un programa formal en derechos humanos, y una de las personas que ayudó a elaborarlo, Peter Bell, hizo de los derechos humanos la pieza central de la Fundación Interamericana, la cual dirigió desde finales de la década de los 70 hasta principios de los años 80 (*ver* Keck y Sikkink 1998)<sup>8</sup>.

## LA RECONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE UN CONSENSO ESTATAL: DEL ESTADIO AL SALÓN DE CLASES

La institucionalización de la actividad de los derechos humanos, financiada por las organizaciones filantrópicas, siguió la senda de las grandes inversiones que se habían dado en la esfera académica de las ciencias sociales. La sociología e incluso la economía se habían convertido en disciplinas altamente politizadas en la era de Allende, mientras que una serie de personas graduadas, que salían al mercado en un número que sólo el Estado era capaz de absorber, dirigieron su atención hacia un cambio político y social. La Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Cieplan), un centro de investigaciones reconocido en el área económica y operado primordialmente por economistas formados en los Estados Unidos a comienzos de los años 70, asumió una actitud parecida a la de otras instancias en cuanto a su compromiso general para con el diseño de estudios que fueran de utilidad para el Estado, incluyendo el régimen de Allende. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Cepal, entre otras instituciones, también se dedicaron fuertemente al estudio de teorías de la dependencia, así como a otro tipo de análisis que hicieron girar la balanza hacia la izquierda, lo cual parecía inconsistente con los esfuerzos de la anterior generación de especialistas en ciencias sociales que tenían

<sup>8</sup> Uno de los integrantes de la Fundación Ford afirma que ciertos elementos de un programa de derechos humanos ya existían en Argentina a principios de los años 60, que luego “empezaron a extenderse en el Brasil” con posterioridad al golpe militar de 1964, y luego se difundieron “completamente mediante grupos llamados de derechos humanos en Chile” después de 1973.

una orientación más positivista. La política guiaba el destino de las ciencias sociales mientras la situación de compromiso político llegaba a su fin. Luego de que Pinochet llegó al poder, se dio un resurgimiento de los anteriores enfoques de corte más estadounidense, los cuales buscaban tomar distancia de una agenda claramente política, en gran medida para sobrevivir en un entorno en donde hacer política era ilegal.

Los centros de investigación que contaban con financiación del exterior —y con la protección internacional y en ocasiones con la religiosa— se convirtieron en el hogar de las personas opositoras de Pinochet (Puryear 1994; Santiso 1996). Como fue resaltado por Jeffrey Puryear, uno de los funcionarios de la sede chilena de la Fundación Ford, el nuevo papel que desempeñaron los centros comenzó con la realización de tres proyectos conformados por seis investigadores y financiados por la Ford, cuyo objeto era facilitarles refugio a académicos disidentes que habían sido expulsados de las universidades (45). Incluso cuando los centros crecieron —alcanzando su cenit en 1988, cuando llegaron a ser 49 y empleaban alrededor de 664 profesionales— “los centros privados de investigación de oposición continuaron recibiendo sus fondos casi en su totalidad de arcas extranjeras” (Puryear 1994, 43, 51)<sup>9</sup>.

Estos centros privados financiados con dineros foráneos tenían diversos vínculos con el movimiento de los derechos humanos, y de hecho muchos de ellos emprendieron estudios sobre el papel de los derechos humanos (Puryear 1994, 45). Sin embargo, estos centros sobre todo facilitaron otro tipo de caminos para transformar la política en un escenario técnico y neutral. Así, mantuvieron un nexo directo con el ámbito de las ciencias sociales y con los especialistas en ciencias sociales que habían venido ganando importancia durante la década de los 60. La nueva inversión de esfuerzos y recursos, como lo indicó uno de los participantes de la Fundación Ford, “fue una extensión natural de ayuda facilitada a lo largo de los años 60, cuando una variedad de donantes emprendieron esfuerzos sistemáticos y sostenidos para vigorizar la enseñanza y la investigación en ciencias sociales”. De este modo, un grupo de “políticos especialistas en ciencias sociales”, que había mantenido una posición activa durante la década de los 60, asumieron el liderazgo de estos centros, permitiéndoles permanecer en Chile así como reorganizarse luego del golpe militar.

Las inversiones en el ámbito de las ciencias sociales beneficiaron a aquellos pertenecientes a la clase política que contaban con acreditaciones en

<sup>9</sup> Según Santiso (1996, 260), el respaldo extranjero fue, por parte de los Estados Unidos, de alrededor de 55 millones de dólares por año en la mitad de la década de los 80, y por parte de Alemania, aproximadamente de \$26 millones por año en el período 1984-1988. De hecho, los recursos germanos tenían un vínculo íntimo con los partidos políticos y tendían a orientarse hacia aquellas instituciones que fueran cercanas al partido correspondiente de Chile (1996, 261).

dicho ámbito. Como afirmó Puryear, “así emergieron lo que varios observadores caracterizaron como ‘una extraña combinación de políticos intelectuales’” (1994, 57). La Fundación Ford, por ejemplo, como sostuvo Edgardo Boeninger, “mantuvo una simpatía especial hacia la democracia, pero no pudo financiar ciertos perfiles sólo porque tenían una etiqueta política”. Como resultado, “los centros impusieron una estructura académica a los políticos, invitándolos a seminarios y enviándoles diverso tipo de publicaciones” (Puryear 1994). Más aún, “las ciencias sociales en general eran permitidas, mientras que la política no”. Como lo expuso Alejandro Foxley, del Cieplan, dentro del seno de las ciencias sociales “la crítica más aceptada era la económica. De esta forma el debate político finalmente se convirtió en una discusión sobre políticas económicas” (Puryear 1994, 58). Como veremos más adelante, los políticos tradicionales —y especialmente los abogados tradicionales—, fueron incluidos dentro de este marco académico o simplemente eliminados del todo del debate<sup>10</sup>.

Los términos de estos debates científicos, tanto económicos como sociales, fueron “mejorados” y transformados en el mercado internacional de las técnicas y los conocimientos especializados. Por ejemplo, el debate económico tuvo que ser conducido por “un grupo de especialistas respetados” (José Brunner, en Puryear 1994, 59) que pudieran hablar el lenguaje de la matemática, el cual para ese entonces era adquirido primordialmente a través de una educación adelantada en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. En general, como también precisa Puryear, “los donantes del extranjero tendían a valorar más la ciencia que la ideología, y los asuntos técnicos más que los teóricos” (52). Tal y como lo sugirió José Joaquín Brunner, el intelectual chileno aprendía “tres fórmulas anglosajonas: ‘pública o perece’, ‘no a las cosas sin sentido’ y ‘responsabilidad pública’” (Puryear 1994, 53). Según Brunner ahora ellos eran como la economía, a saber, “abiertos hacia la competencia internacional”. De igual forma, “los estándares internacionales se volvieron más relevantes” (Puryear 1994, 53, 52), y las ciencias sociales lograron un mayor grado de profesionalidad. Así, los nuevos intelectuales cosmopolitas estaban destinados a resultar favorecidos.

Estos cosmopolitas especialistas en ciencias sociales terminaron involucrados en una red internacional de intelectuales que examinaban el mismo conjunto de problemas. Esta red incluía académicos foráneos y chilenos que se encontraban viviendo en el extranjero durante el régimen de

<sup>10</sup> Así, Puryear señala que los nuevos líderes “socialistas” eran intelectuales, “en contraste con los viejos líderes cuya base se había consolidado en el sector laboral o mediante la organización de los partidos” (1994, 63). Para realizar el paralelo obvio, el mismo fenómeno se dio en el dominio de los derechos humanos, en donde aquellos que progresaban eran asociados con el derecho, y no con el ejercicio de la política, en materia de derechos humanos.

Pinochet (Puryear 1994, 76)<sup>11</sup>. El enfoque de esta comunidad sufrió un viro que fue desde la ideología y la teoría general hacia el pragmatismo y el pluralismo (Puryear 1994, 69). Como lo expuso Miguel Garretón, de la Flacso, los centros de investigación más importantes permitieron a los especialistas en ciencias sociales “reagruparse” y mantener “contactos con el mundo exterior”, creando de esta manera “una red muy sorprendente tanto adentro como afuera”.

La creación de estas plazas de intercambio para las élites de intelectuales cosmopolitas facilitó de esta manera el proceso de construcción de un nuevo consenso, así como la aparición de “nuevos interlocutores” capaces de darle voz y difusión a dicho consenso (Santiso 1996, 266, 269)<sup>12</sup>. Diversas personas lograron conformar nuevas relaciones y estructuras de liderazgo. En particular, comenzando en los años 80 y acelerando el proceso con la crisis económica suscitada en esos años, los centros de investigación prestigiosos que habían iniciado su trayectoria de un modo bastante apartado –incluyendo los de derecha que asistían a los economistas en el poder y aquellos más de izquierda que recibían en su seno a los intelectuales disidentes– empezaron a crecer de manera conjunta, facilitando así los compromisos que condujeron a la transición al final de la década.

La segunda generación de Chicago Boys –más decidida a pensar en instituciones en comparación con el primer grupo que le había prestado sus servicios a Pinochet– comenzó a inscribirse en un nuevo tipo de discurso intelectual. El Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980, se constituyó en un nuevo foro para dicha generación<sup>13</sup>. Bajo la dirección de Arturo Fontaine Talavira, hijo del editor de *El Mercurio*, el CEP expandió su enfoque más allá de los asuntos económicos básicos. Este centro trajo de los Estados Unidos pensadores “neoliberales” de punta –tal y como ahora son caracterizados–, siendo de este modo un vehículo para la realización de seminarios que incluían intelectuales de oposición. Al mismo tiempo, el personal del CEP empezó a participar en la vida intelectual de los otros centros privados de investigación (Puryear 1994, 91). Por lo tanto, las élites intelectuales de ambos flancos comenzaron a respetar ciertas reglas del juego, las cuales hacían que se tolerara un alto grado de discusión en los debates académicos cosmopolitas (Santiso 1996, 267).

<sup>11</sup> Santiso los describe como “comunidades epistémicas fuertemente transnacionalizadas” (1996, 75) a través de la financiación y de las actividades por ellos adelantadas. De esta manera, ellos estuvieron perfectamente familiarizados, por ejemplo, con el ocaso global del socialismo y con la lucha de España para consolidar la democracia.

<sup>12</sup> “Ellos restablecieron vínculos de confianza que fueron emergiendo progresivamente, primero en el plano intelectual y luego en el plano político, respecto al consenso sobre el estilo de transición que se debía adoptar” (Puryear 1994, 67).

<sup>13</sup> Evidentemente la idea original era construir una universidad, pero el proyecto nunca se llevó a cabo.

Dentro de este mundo fueron forjados los contactos personales e intelectuales que resultaron cruciales para la transición<sup>14</sup>. Como lo propuso Miguel Garretón, estos contactos tornaron “la resistencia en oposición”, desarrollando así –en las palabras de otro protagonista clave– un “discurso positivo” para el regreso a la democracia, al igual que una estrategia de negociación y la producción de una serie de acomodamientos con los cambios políticos y económicos implementados por Pinochet. Entre este grupo, por lo general se le conceden a Edgardo Boeninger los créditos como el agente determinante de las ideas y las personas (Puryear 1994, 92-95; Santiso 1996, 270). Cercano a Patricio Aylwin, un político de corte más tradicional, Boeninger fue crucial tanto para la empresa de reunir a los intelectuales como para el perfeccionamiento de una alianza con la clase política tradicional representada por el propio Aylwin.

La crisis de la deuda a principio de los años 80 llevó a que el grupo de Boeninger y los intelectuales en el poder reconocieran la importancia de este cometido académico así como de las redes de vínculos que se estaban creando o que estaban en proceso de ser reconstruidas. En el otro costado, la crisis de la deuda también incrementó la importancia que el régimen de Pinochet le concedía a la legitimidad internacional. Hacia 1986, desde la perspectiva de Boeninger y otros que se encontraban en la oposición, “la movilización social no condujo a la caída” de Pinochet –según palabras de uno de ellos–. De hecho la economía estaba sufriendo un colapso, pero el desastre económico resultante no precipitó el tipo de movilización social que se requiere para derrocar a un gobierno militar. Por lo tanto comenzaron a concentrarse más en el plebiscito de 1988 que había sido programado por Pinochet en 1980. Empezaron así a tomarse en serio la posibilidad de volver al poder a través de unas elecciones.

Simultáneamente llegaron a la conclusión de que un cierto tipo de aceptación de la amnistía propuesta por Pinochet para impedir juicios por violación de los derechos humanos tendría que ser necesaria. Igualmente admitieron que tendría que haber una “política económica responsable” que continuara con la liberalización impulsada por los Chicago Boys. La oposición política, unificada como parte de la Concertación de Partidos para la Democracia, congregó una campaña para votar por el no en el plebiscito de 1988. Un “comité técnico para el No”, dirigido por científicos sociales y asistido por una firma consultora estadounidense, entonces condujo la primera campaña “moderna” en Chile, enfatizando en la votación, en la focalización de grupos y en la producción de una sofisticada publicidad en

<sup>14</sup> La lista de figuras clave de este mundo incluye a Edgardo Boeninger del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Alejandro Foxley del Cieplan; José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Angel Flisfisch, Manuel Antonio Garretón y Norbert Lechner de la Flacso; Eugenio Tírón del Centro de Estudios Sociales y Educación (SUR); y Felipe Larraín del CEP (cf. Santiso 1996, 269).

la televisión (Puryear 1994, 150-159). La estrategia, que también se apoyaba en diversas presiones internacionales que exigían unas elecciones limpias (Carothers 1991) —especialmente luego de la decisión de Reagan de respaldar el movimiento de los derechos humanos para este caso específico—, desembocó en una victoria con el 55% de los votos así como con la convocatoria a unas elecciones presidenciales para el año siguiente.

Dentro del gobierno de Pinochet, al igual que en los prestigiosos centros de investigación que lo rodeaban, la crisis económica representó más poder para aquellos que estaban interesados en erigir instituciones más legítimas y en prestar mayor atención a la esfera del derecho. La necesidad de instituciones tuvo lugar para proteger el legado de los Chicago Boys y para generar una mayor credibilidad internacional<sup>15</sup>. Por supuesto, la tolerancia para con una creciente actividad política de la oposición fue otro de los factores presentes (Boeninger 1996, 8). Finalmente de nuevo se prestó atención al sistema judicial, en parte por las dificultades que los jueces habían suscitado en el período inmediatamente posterior a la crisis de la deuda<sup>16</sup>.

Una de las figuras ejemplares del ala de Pinochet en las negociaciones fue Carlos Cáceres, un economista que fue presidente del Banco Central en 1982 y ministro de Hacienda en 1983. Él también contaba con acreditaciones norteamericanas en su haber, incluyendo dos títulos obtenidos en los Estados Unidos y una buena relación tanto con Milton Friedman como con Friedrich von Hayek, entre otros, a través de la Mount Pelerin, una sociedad transnacional cuya sede estaba en Ginebra<sup>17</sup>. Luego de ausentarse del Gobierno por varios años, fue invitado a ocupar el cargo de ministro del Interior en 1988. De acuerdo con fuentes periodísticas, Cáceres fue una figura central en la negociación de los cambios constitucionales realizados por cada bando para acceder pacíficamente a la configuración

<sup>15</sup> La crisis económica acarreó ataques voraces en contra de los economistas por parte de los nacionalistas en el gobierno de Pinochet e incluso de *El Mercurio*. Según Osorio y Cabezas, “a inicios de febrero de 1983, los nacionalistas lanzaron una nueva ofensiva para tomar el control del régimen. Las condiciones eran propicias. La crisis económica había dejado en desgracia la imagen de los Chicago Boys, y Pinochet se mostraba receptivo a sus críticas” (1995, 139). El ministro del interior, Sergio Onofre Jarpa, en una charla que dictó a los empresarios, atacó las ideas “extranjeras” de los Chicago Boys (Osorio y Cabezas 1995, 143).

<sup>16</sup> Según un observador, el grupo respectivo dentro del Gobierno en el período 1982-1986 emprendió ciertos esfuerzos para reformar la judicatura, ya que los jueces estaban siendo incapaces de manejar las bancarrotas producto de la crisis de la deuda. También existían casos criminales extensos que nunca habían llegado a la etapa final. El número de juzgados se incrementó en un 50% para atender los numerosos casos de la crisis de la deuda, pero aun así la situación no mejoró. Algunos ingenieros realizaron un estudio para el Ministerio de Justicia en 1984-1985, sugiriendo que los tribunales necesitaban modernizar sus procesos, pero la judicatura y sus aliados tradicionales se resistieron. Así, manifestaron que “los economistas estaban entrometiéndose en la marcha de los tribunales”, y advirtieron que “no intentarían apurarnos”. El Gobierno aún no quería tener altercados con la judicatura, así que el cambio terminó echándose al traste.

<sup>17</sup> Cáceres se afilió con Pedro Ibáñez en la década de los 60 (Osorio y Cabezas 1995, 153).



de un nuevo gobierno (Cavallo 1992, 56-68; Otano 1995, 73)<sup>18</sup>. Aun cuando en estricto sentido no era un *Chicago Boy*, estaba comprometido con la institucionalización del nuevo orden económico. Conforme a Osorio y Cabezas (1995, 143), Pinochet se vio en la necesidad de promover el perfil de Cáceres y de sus aliados, a pesar de las críticas elevadas por los economistas de Chicago luego de la crisis de la deuda, debido a la conveniencia de mantener personas de suficiente talla internacional para afrontar las negociaciones con los Estados Unidos y el FMI<sup>19</sup>. A Cáceres además se le ha concedido el crédito de convencer tiempo más tarde a Pinochet de introducir ciertas reformas en la Constitución de 1980, “en aras de obtener éxito a través de su legitimación” (Osorio y Cabezas 1995, 148).

El punto más relevante acerca de los intelectuales cosmopolitas descritos por Puryear y Santiso –al igual que de sus análogos en el gobierno– es que eran “políticos pensantes” y “políticos gestores” al mismo tiempo (Santiso 1996, 265), tanto por sus dotes en investigación como por sus redes personales y profesionales, las cuales se extendían mucho más allá de los límites de Chile. Ellos facilitaron lenguajes y herramientas de gobierno “modernos”, que fueron empleados para salvar a la economía neoliberal de Pinochet, así como para promover un modelo económico de corte democrático y neoliberal. Los intelectuales de oposición también se convirtieron en figuras clave en el gobierno de Aylwin y en la posterior administración de Eduardo Frei. Virtualmente todos los actores principales de los centros privados que se habían opuesto a Pinochet formaron parte de los nuevos gobiernos, y los economistas se mantuvieron como el grupo más numeroso dentro del gabinete de ministros, incluso luego de que el período de transición había llegado a su fin (*ver* Markoff y Montecinos 1993, 38)<sup>20</sup>.

En varios sentidos, los políticos intelectuales reemplazaron a los abogados tradicionales, y en particular el papel que ejercían en el Gobierno. De hecho, varias de estas personas se desempeñan en actividades –incluyendo aquellas de participación en la vida política como intelectuales– que se parecen bastante a las “tareas que desarrolla un abogado”, de acuerdo con los tradicionales cánones chilenos. También se puede constatar la generación de una red personal de contactos bajo la sombra protectora de la credibilidad académica, pero esta vez ya no suscitada en las facultades de derecho sino en los centros de investigación. De modo similar, parte de la actividad del nuevo grupo se encuentra orientada a la producción de de-

<sup>18</sup> Cáceres actualmente es el presidente del Centro de Libertad y Desarrollo, creado por Hernan Buchi.

<sup>19</sup> “Una visita del FMI obligó a que el Gobierno lo llamara, ya que no se sabía de otra persona con su capacidad y experiencia para afrontar a los negociadores de la organización internacional” (Osorio y Cabezas 1995, 143).

<sup>20</sup> Entre aquellos de los centros privados que formaron parte del Gobierno, se encuentran Brunner, Boeninger, Foxley, Enrique Correa, Carlos Ominami y muchos otros.

claraciones legítimas pero, en contraste con los abogados tradicionales y con los profesores de derecho, dichas declaraciones son más modernas, esto es, más consistentes con aquellas que son producidas en Norteamérica.

## **BRASIL: LA RESTAURACIÓN Y LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁMBITO JURÍDICO DEL PODER**

La experiencia brasileña en materia de derechos humanos se encuentra marcada por el papel que lograron jugar las instituciones nacionales existentes. Los escenarios confinados de Chile facilitaron la presencia de un tipo de confrontación que estuvo casi totalmente internacionalizada desde un principio. La élite más extendida y diversa del Brasil permitió que se dieran muchas más gradaciones entre los militares de línea dura y los activistas militantes. El estamento militar, en sí mismo, era más variopinto en el caso del Brasil, con un grupo instruido que ya contaba con vínculos con los Estados Unidos, debido al método de enseñanza implementado en las academias militares. El primer golpe militar de 1964 no desató una ruptura abrupta y de hecho obtuvo un respaldo relativamente amplio dentro de la élite brasileña. Como en Chile, el movimiento de los derechos humanos necesitó la protección de la Iglesia, pero también había instituciones jurídicas —especialmente el gremio organizado de abogados— que lograron ser movilizadas cuando las personas de línea dura accedieron al poder a finales de los años 60.

### **Las comisiones de paz y de justicia: el reagrupamiento de notables de élite alrededor de la iglesia**

La abierta oposición frente a las medidas represivas de los militares en el Brasil inicialmente tuvo su centro en la iglesia católica<sup>21</sup>. Dom Paulo Evaristo Arns, arzobispo designado de São Paulo en 1971 (y cardenal en 1973), fue una ficha estratégica para reunir a la oposición que logró consolidarse dentro de la comunidad activista católica. Él conformó las Comisiones de Paz y de Justicia que empezaron a orientar sus actividades en contra de la violencia producida por el régimen militar<sup>22</sup>. Asimismo, dio el sustento y algo de la autonomía que se requería frente a las condenas del Vaticano a los actos de tortura del Brasil, así como frente a la campaña de las iglesias cristianas en favor de los derechos humanos —la cual fue lanzada en 1973, en coincidencia con el vigésimo quinto aniversario de la Declara-

<sup>21</sup> La oposición se pudo servir de la historia activista de la Iglesia de la década de los 50 e inicios de los 60 (ver, en general, Mainwaring 1986).

<sup>22</sup> Él recibió un premio importante por sus actividades en derechos humanos de parte del gobierno de Cardoso el 10 de diciembre de 1995, en conmemoración de la Declaración Universal. También fue el organizador del movimiento Tortura Nunca Más.

ción Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas (Della Cava 1989, 146-147)<sup>23</sup>. Según Mainwaring, “Dom Paulo muy pronto se convirtió en líder a lo largo y ancho de la nación, adentro y afuera de la Iglesia, en la campaña para proteger los derechos humanos” (1986, 106)<sup>24</sup>.

Desde sus inicios la campaña de la Iglesia involucró a un puñado de abogados. Uno de ellos fue José Carlos Días, quien estuvo dispuesto a defender a los presos políticos perseguidos por el régimen militar<sup>25</sup>. Él se unió al grupo debido a que el Cardenal en 1970, quizás aprovechando los vínculos que Días había creado con la izquierda católica en sus actividades de estudiante, le pidió formar parte del establecimiento de la Comisión de Paz y Justicia. Días entonces se convirtió en su segundo presidente, ayudando no sólo a la defensa de los prisioneros políticos sino también al impulso de áreas tales como la censura de prensa o la obtención de pasaportes para personas brasileñas que se encontraban en el exilio. Otro de los abogados graduados a quien el Cardenal le solicitó hacer parte del proyecto fue Fabio Konder Comparato, profesor de la Universidad de São Paulo que había seguido la tradicional trayectoria de adelantar estudios en el exterior. También resulta importante mencionar, debido a su relevancia posterior, a José Gregori, una de las figuras destacadas en el gobierno de Cardoso y actualmente magistrado de la Corte Suprema. Él también trabajó en la promoción y protección de los derechos humanos en un esfuerzo conjunto con la iglesia de São Paulo. Estos abogados, que contaban con un perfil relativamente tradicional, fueron de las pocas personas que reaccionaron rápidamente con el fin de reajustar dicho perfil de acuerdo con las nuevas exigencias surgidas como consecuencia del ascenso al poder de los militares de línea dura. Como veremos más adelante, estos ejemplos de São Paulo guardan nexos con las actividades que se estaban llevando a cabo en Río de Janeiro a través de la *Ordem dos Advogados (OAB)*, la organización gremial de los abogados brasileños.

<sup>23</sup> Della Cava sitúa la actividad de la Iglesia en el contexto de las políticas de la propia iglesia brasileña y asimismo toma en consideración las conexiones internacionales y las presiones provenientes de la Iglesia católica (1989).

<sup>24</sup> Mainwaring sostiene que en el período 1974-1982 “la iglesia brasileña ... se convirtió en la iglesia más progresista del mundo” (1986, 145).

<sup>25</sup> Él había tenido una trayectoria bastante típica después de haberse graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de São Paulo en 1963. Luego empezó a representar a los prisioneros políticos en 1969, pero esta labor fue cuidadosamente expresada en términos jurídicos profesionales. Según una fuente cercana a él, para que “mantuviera una postura profesional” no aceptaba dinero de nadie excepto de las familias que pudieran sufragar los gastos. De esta forma, dio énfasis a la necesidad de profesionalismo y de autonomía con respecto al Estado. De otra parte, defendió aproximadamente a 700 prisioneros políticos a pesar de que fue puesto en prisión en tres ocasiones. Resulta importante anotar que los abogados por lo general tuvieron éxito ante los tribunales marciales, ya que el sector de línea dura del estamento militar colocó a los funcionarios de tendencia más liberal al servicio de dichos tribunales (Skidmore 1988, 131-132).

## La OAB: de las estrategias elitistas a las estrategias institucionales

No hay duda de que la OAB, como institución, pasó a ser uno de los actores centrales en la transición del régimen militar frente a la actual forma de gobierno democrático. No obstante, la historia no es meramente unidimensional. El proceso fue relativamente lento; la OAB asumió un papel relevante sólo hasta la mitad de la década de los 70. Este papel fue el resultado de una combinación de presiones directamente ejercidas en la práctica del derecho, presiones que se precipitaron debido a los ideales jurídicos defendidos por el personal raso de la OAB, así como al incremento de inversiones en esfuerzos y recursos por parte de abogados graduados de élite, quienes se servían del escenario en pleno cambio de los Estados Unidos, así como del movimiento internacional de los derechos humanos. Durante el proceso, la OAB misma sufrió un giro, pasando de un período en donde estaba dominada por las personas de élite detentadoras de cargos dispuestos adentro y alrededor del derecho, hacia otro en donde los miembros rasos trataron de asumir el control de la institución e implementar muchas más líneas de ayudas corporativas<sup>26</sup>. Pero la influencia política de la OAB decreció nuevamente cuando los partidos políticos y la democracia política brasileña restauraron varias de las plazas tradicionales para que fueran ocupadas por políticos–abogados.

Un prestigioso abogado de negocios en Río, quien guarda vínculos íntimos con la OAB, anotó que, por muchos años, los abogados del Brasil no se vieron muy afectados por el golpe militar, continuando de esta forma con su actitud de “prestar atención [sólo a sus propios] negocios”. Mientras el gobierno había cambiado, ellos lograron seguir desarrollando las mismas actividades. De hecho, la mayoría de los miembros de la profesión jurídica dieron su apoyo inicial al golpe militar de 1964 (junto con otras élites y el

<sup>26</sup> Otro residuo del activismo político de la OAB en los años 80 fue que tal institución también sirvió como foro de discusión sobre el tópico de lo que debía ser el derecho, así como de escenario de promoción tanto del “derecho alternativo” como de la sociología del derecho. De hecho existen numerosas publicaciones que promueven el “derecho alternativo” en el Brasil, y por un lapso de la década de los 80 el área de investigaciones de la OAB estuvo dirigida por abogados que guardaban nexos con los académicos de la línea de derecho y sociedad y con personas simpaticantes con la reforma en la educación del derecho. Eliane Junqueira, quien había realizado un programa de derecho y desarrollo en la PUC como estudiante, fue la directora del programa de investigación de la OAB desde 1985 hasta 1987, y Michael Pressburg, uno de los líderes en el “derecho alternativo”, fue director de dicha institución de 1989 a 1991 (OAB/RJ 1995). El mismo derecho alternativo se ha servido de muchas fuentes de Europa y de los Estados Unidos, y parte de su atractivo consiste en que pretende integrar el escenario internacional de los derechos humanos a los debates políticos brasileños, y especialmente a discusiones acerca de los derechos sociales que puedan ser empleadas en contra del neoliberalismo. Así, el derecho alternativo y la línea de derecho y sociedad se encuentran estrechamente conectadas. Entre los ejemplos de volúmenes editados que combinan estos dos campos de estudio se encuentran los libros de Faria (1989, 1994).

Gobierno de los Estados Unidos). En general, lo que ocurrió es que la élite de la sociedad brasileña, muchos de cuyos integrantes habían sido educados como abogados, en un principio no movilizó la estructura de la OAB para engendrar una oposición institucional al poder militar. Como lo sugiere la discusión de las Comisiones de Paz y de Justicia, la situación empezó a cambiar con el ascenso de los militares de línea dura.

Pero al interior de la OAB resulta claro que, ya desde 1972, sus funcionarios estaban expidiendo declaraciones significativas en favor del Estado de derecho (Skidmore 1988; 186; Venâncio 1983, 155-158). Igualmente en el encuentro de la OAB de 1974 se enfatizó el tópico de “el abogado y los derechos del hombre” (Venâncio 1982, 169-175). No obstante, el período en que la OAB consiguió ser más visible fue bajo la administración de Raymundo Faoro, quien llegó a ser presidente de la OAB sólo hasta 1977-1978<sup>27</sup>. Faoro, como politólogo también formado en derecho y reconocido en el ámbito académico por sus libros jurídicos, provino de los lazos presentes en el Sur meritocrático y no de aquellos propios de la élite más tradicional<sup>28</sup>. Según uno de los abogados de élite en Río, Faoro era “un personaje peculiar que fue elegido sólo por un voto”, pero que sin embargo “dio un gran prestigio” a la OAB<sup>29</sup>.

La dinámica que trajo a Faoro al poder ilustra lo que era considerado “peculiar” en él. Pero primero resulta necesario examinar la estructura de la OAB y de su institución hermana, el aún más elitista Instituto de Abogados Brasileños. Este Instituto fue creado en 1843, mucho antes de la fundación de la OAB en 1930 (Falcão 1988, 426). En la década de los 60, el Instituto contaba sólo con alrededor de 300 miembros, pero se dice que controlaba una tercera parte de los miembros de los consejos regionales de la OAB “hasta tiempos recientes” (Falcão 1988, 426). Sus actividades se centraban en la realización de seminarios y en la discusión de importantes asuntos jurídicos pero, sobre todo, se trataba de un club de la élite. De acuerdo con uno de los miembros de ese entonces, el Instituto era “bastante elitista”, con un sistema de admisión de “balota negra”, lo cual significaba que los miembros debían tener una cierta “posición social” para tener

<sup>27</sup> Eduardo Seabra Fagundes, su sucesor, y también formado en el Ceped, fue el blanco de una bomba que mató a un trabajador de la OAB.

<sup>28</sup> Los logros de Faoro encajan bastante bien con el modelo de éxito personal que para entonces existía en Brasil. Ya que el trabajo académico brillante generalmente no se fundaba en la doctrina puramente jurídica, los abogados intelectuales destacados podían desplazarse por una serie de tópicos y “disciplinas”. Los trabajos de Faoro representan los logros de una generación y una tradición que ignoró las fronteras intelectuales. Su famoso libro, *Los dueños del poder*, fue publicado en 1957.

<sup>29</sup> Faoro también creía, de acuerdo con la misma fuente, que todos “los cargos directivos” estaban a su disposición después de haberse desempeñado en este trabajo, pero en realidad no lo estaban. En efecto, no obtuvo acceso a múltiples posiciones que, como él mismo sabía, caracterizaban a la tradicional élite brasileña.

acceso. Los que tenían dicha posición social, recalcan, no eran aquellos que “solamente” ejercían el derecho. De hecho, los abogados generalistas diletantes del Instituto por regla general pasaron a ser presidentes de la OAB.

Los líderes reconocidos del gremio de abogados brasileño no eran “abogados practicantes” sino, mejor, dirigentes del Estado, profesores, expresidentes de los tribunales, exmagistrados de la Corte Suprema y otros que en buena medida formaban parte de la élite brasileña gobernante. Se trataba de una entre las muchas posiciones que podía llegar a caracterizar las múltiples actividades de la élite jurídica tradicional. Con el ascenso al poder de los militares de línea dura, algunas de las posiciones en los partidos políticos y en el Estado se vieron obstruidas. Aun cuando de una manera algo tardía, los miembros de esta élite utilizaron la OAB como una plataforma poderosa para reclamar el regreso al Estado de derecho. No obstante, en la realización de este cometido la élite impulsó y participó en un proceso que recurrió a los esfuerzos de los profesionales rasos para consolidar y validar la autonomía del derecho. El movimiento que reclamaba asumir el derecho en serio desembocó en la dirigencia de la OAB por parte de Faoro. Otras personas que ayudaron a la movilización de la OAB, y se sirvieron de la misma, eran de un corte más típico de la élite tradicional, buscando caminos para emplear los esfuerzos y los recursos invertidos en beneficio de sus propias posiciones, como líderes potenciales de una élite que se encontraba en creciente oposición ante los militares de línea dura.

Resulta interesante, dentro del contexto brasileño, que la demostración de fuerza por parte de personas del nivel raso tuviera una repercusión más amplia en el manejo político de las profesiones. En efecto, poco después, los profesionales rasos empezaron a desaprobare a aquellos que pretendían acceder a los altos cargos de la OAB sin que fueran “verdaderos” abogados, pues con ello simplemente estaban intentando ingresar en la élite gobernante. Las políticas de la OAB se transformaron, dejando de ser una plaza dominada por los detentadores de la élite, para pasar a las manos de las bases. Esta nueva supremacía hizo que el enfoque de la OAB también sufriera un cambio paulatino, teniendo ahora más importancia los asuntos del pan de cada día de los abogados practicantes que aquellos atinentes al Estado. Como era de esperarse, los miembros de la élite jurídica se inclinaron a mantener una posición fuertemente crítica frente a esta tendencia que privilegiaba las cuestiones corporativas.

El escalamiento del activismo de la élite en contra del estamento militar –ostensible en las actividades adelantadas por la OAB en respaldo al Estado de derecho– surgió en un momento en que la opinión internacional y una buena parte de la doméstica había experimentado una alteración, fenómeno que incluso estaba teniendo lugar dentro de las filas militares (Skidmore 1988, 200). Dentro de Estados Unidos, en donde inicialmente el

golpe militar había sido avalado, el consenso en torno a la Guerra Fría se encontraba dividido a tal punto, que el Congreso dispuso los asuntos materia de derechos humanos como uno de los puntos en la agenda de las relaciones internacionales. Las actividades en Chile, arriba reseñadas, así como las campañas posteriores realizadas en la Argentina, ayudaron a edificar una comunidad internacional de los derechos humanos más legítima y extensa. Por supuesto, la elección de Jimmy Carter tuvo relación con la pujanza de esta tendencia. Amnistía Internacional comenzó a publicar reportes acerca de la situación de Brasil en 1972 (Skidmore 1988, 196, 374). Asimismo, los informes del Departamento de Estado estadounidense, ordenados por el Congreso como una de las consecuencias de la división del establecimiento estadounidense, dieron mayor legitimidad a las críticas erigidas por Amnistía.

La capacidad de la OAB para desenvolverse bajo un nuevo papel en el que mantenía el enfoque de un ente crítico independiente, hizo que su posición relativa cambiara a lo largo de las décadas de los 70 y 80. Diversos beneficios simbólicos irrigaron tanto al gremio como una entidad corporativa que representaba a los abogados, como a los abogados mismos que de modo destacado se habían opuesto al régimen. Como habíamos señalado, un nuevo tipo de personas empezaron a ingresar a la OAB –tales como Raymundo Faoro–, permitiendo así la configuración de un grupo más meritocrático dispuesto tanto a luchar como a negociar con sus interlocutores localizados dentro del estamento militar. Además, la porción del establecimiento que asumió la misma posición y utilizó a la OAB en esa medida, sacó provecho de dicha estrategia. En efecto, gradualmente empezaron a hacer oír su voz de oposición frente al régimen, y luego lograron utilizar dicha oposición como una credencial impecable para desafiar a los sectores más conservadores o a los elementos ortodoxos del establecimiento<sup>30</sup>. De esta forma, ellos y otras personas que habían dedicado sus cometidos a la empresa de los derechos humanos, ayudaron al surgimiento de nueva sangre, con la cual se llegaría a profesar una fidelidad cabal a las nuevas disposiciones del ordenamiento jurídico.

Hasta ahora no hemos detallado sus actividades en este asunto, pero la Fundación Ford y las agencias internacionales estuvieron bastante

---

<sup>30</sup> Si bien parece ser que la élite cosmopolita en el gremio de abogados del Brasil, como grupo, se orientó hacia una dinámica de mayor activismo jurídico cuando la legitimidad internacional del régimen militar resultó finalmente minada, ello no significó que necesariamente la posición internacionalista fuera la postura ganadora. Por ejemplo, las afirmaciones del presidente Carter no fueron de recibo incluso por parte de aquellos que se oponían a los militares en Brasil y en Estados Unidos. En 1976, como lo anota Skidmore, existía una reacción general negativa a las afirmaciones de Carter, y de hecho el estamento militar intentó ganar apoyo recalcando que los esfuerzos de los Estados Unidos para mediar en los asuntos internos del Brasil eran inapropiados (Skidmore 1988, 200).

involucradas en el desarrollo del movimiento de los derechos humanos en el Brasil. De nuevo, una de las razones por las cuales no ofrecemos una descripción separada al respecto es que, dentro del contexto brasileño, la evolución ocurrida parece ser una dinámica mucho más nativa en comparación con el caso chileno. No sólo hubo una completa continuidad en la evolución de la Ford, que fue desde sus políticas dirigidas a la financiación del sector de las ciencias sociales hasta su activismo aparente en el impulso orientado a la generación de una comunidad política que le concediera más valía a los derechos humanos. Pues además de ello, como lo destaca uno de los funcionarios de la Ford, era un hecho que la financiación de las ciencias sociales en el contexto brasileño ya era vista como “una actividad de derechos humanos”, debido a la importancia de mantener vivas las voces de la oposición (*ver* además Miceli 1993, 296). Pero es verdad que, como fue el caso de los especialistas en ciencias sociales de izquierda de la Cebrap, no fue siempre una tarea fácil para la Fundación Ford “realizar contactos” con las organizaciones de la oposición, tales como las Comisiones de Paz y de Justicia. Varias de las organizaciones locales que se oponían al régimen militar aún sentían que la Fundación Ford guardaba demasiados vínculos con los Estados Unidos<sup>31</sup>. No obstante, se dieron diverso tipo de gradaciones dentro de la relativamente diversa élite brasileña, y así diferentes personas –en un número creciente luego de que el estamento militar desplegó su control sobre el establecimiento de un modo más directo– empezaban a percibir como un asunto de interés el reforzar sus posiciones locales mediante una alianza con la Fundación Ford.

De hecho, la Fundación Ford tuvo éxito en el Brasil debido a que se dispuso a permanecer muy cerca de los acontecimientos que estaban teniendo lugar dentro de la élite brasileña. Es por eso que uno de los antiguos empleados de la Ford sugirió que a la altura del año 1980 la Fundación se había convertido en un espacio “bastante nativo” dentro del Brasil. Los activistas brasileños cercanos a la Fundación “la trataban como si fuera de ellos”. Por ejemplo, para los brasileños era un motivo de gran preocupación saber quién sería el nuevo representante del Brasil y, asimismo, levantaban voces fuertes de protesta si sentían que los funcionarios de la Ford “estaban bloqueándolos”. Considerada como una “agencia gubernamental”, la Ford fue parte del escenario de la élite local en diversos sentidos.

Uno de los exfuncionarios, quien ahora mantiene una posición crítica, enfatiza que “si la Ford financia a una persona, con ello amplía la red social de dicha persona. La persona así se vuelve importante”. De igual forma, la Ford logró en ciertos momentos salirse de su red ordinaria de

<sup>31</sup> Como observó un testigo estadounidense acerca de la segunda mitad de la década de los 70, “existía una proliferación de diversas ONG en el Brasil”, y muchas de ellas no recibían dineros de Estados Unidos.



personas para seleccionar nuevos líderes potenciales. Pero el papel nativo de la Ford también permitió que surgiera un incentivo para que cualquier miembro, actual o potencial, de la élite creara buenas relaciones con dicha institución. Una pista de quiénes fueron exitosos en esta empresa puede ser obtenida al ojear una lista denominada *Friends of the Ford Foundation*, FOFFs (Amigos de la Fundación Ford). Entre aquellos incluidos estaban Mario Enrique Simonson, Rubem Cesar Fernández, Boliver Lamounier, Pedro Malan, Edgar Bachta, Reis Velloso y por supuesto Fernando Henrique Cardoso. Estas eran las personas que rutinariamente obtenían financiación de la Fundación Ford, la asesoraban y asimismo atendían a los funcionarios que venían al Brasil. Fernando Henrique Cardoso, como era de esperarse, probablemente fue la persona del Brasil que mejor se integró al mundo de las élites y fundaciones estadounidenses. Mediante sus contactos con la Fundación Ford, entre otras empresas, ayudó a establecer el Diálogo Interamericano en Washington, un escenario que fue determinante para la influencia y consolidación de los políticos tecnócratas.

De este modo la Fundación Ford logró que los Estados Unidos hicieran amigos en Brasil, en gran parte debido a que encajó perfectamente en un contexto institucional en donde las inversiones internacionales –refiriéndonos aquí especialmente a las áreas de los derechos humanos y de las ciencias sociales autónomas– lograron entablar nexos con bases nativas sólidas.

### **Las comisiones de notables: restaurando el (jerárquico) orden social y jurídico**

El debate político que tuvo lugar antes de la promulgación de la constitución brasileña en 1988 suministra un ejemplo clave de lo que fue visto, como lo señaló un abogado, como “el regreso de los abogados”. La Comisión de Notables conformada por el presidente Sarney en 1986 resulta de particular importancia. De sus 50 miembros, alrededor de 29 eran abogados. Este grupo incluía a varios que habían sido identificados con la oposición, entre ellos Plinio Sampaio, delegado de los asuntos relacionados con el poder judicial; Alberto Venâncio Filho, encargado del área de derechos de los negocios, y Hermann Assis Baeta, quien había sido presidente de la OAB. Muchos de los allí presentes se las habían arreglado para mantener distancia con el régimen militar a través de la OAB o de las Comisiones de Paz y de Justicia.

Los debates constitucionales volvieron a fusionar a la élite con el lenguaje jurídico tradicional, sobre todo en los escenarios relacionados con temas de gobierno. Uno de los abogados de izquierda y de élite, cuya carrera había sido desarrollada en ámbitos ajenos al derecho, afirmó que en los debates sostenidos acerca del papel de la Corte Suprema con un juez con-

servador de larga experiencia, el lenguaje jurídico empleado había sido completamente técnico. No obstante, al mismo tiempo, la discusión estaba permeada por una relación personal que habían mantenido durante varios años. El debate, según uno de los participantes activos, se desarrolló entre “viejos amigos” que habían tomado “muchos whiskeys” juntos. Así, los debates constitucionales le reportaron una ganancia al derecho en general, a los abogados que participaron en las discusiones de alto nivel y al espíritu tradicional de compromiso brasileño que también estuvo enmarcado dentro de un lenguaje de corte jurídico. No obstante, una diferencia de ese lenguaje jurídico es que ahora se estaba convirtiendo en una instancia cada vez más orientada hacia el derecho y las prácticas jurídicas estadounidenses, incluyendo el ámbito de los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el nuevo derecho económico que había sido conocido, en parte, a través del programa de derecho y desarrollo.

La combinación de las preocupaciones locales con las internacionales facilitó el retorno de lo que casi había sido una clásica división de funciones: una vez más, aparecieron en el escenario los destacados notables así como los especialistas, esto es, los que eran simplemente abogados, sin más ni más. Esta división de funciones restauró el orden jurídico pero, como será discutido en los capítulos de conclusión, también generó problemas en asuntos como la reforma judicial. En particular, esta división reposa en la presunción de que la tradicional élite jurídica se encuentra en varios sentidos “por encima” de los jueces y del derecho en estricto sentido.

## LA LUCHA ARGENTINA INTERNACIONALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Concluimos este capítulo con un corto repaso de la situación diferente de Argentina, en donde el régimen militar que ascendió al poder en la mitad de la década de los 70 se convirtió en el más violento de toda la América Latina. En comparación con Chile, no existía una base jurídico-institucional para que surgiera un movimiento en contra de los militares. En Argentina, como lo habíamos señalado, escasamente había algo de estructura en las instituciones que pudiera equivaler a la configuración de un Estado. Por las mismas razones, tampoco existía una iglesia independiente que pudiera ser empleada para escudar actividades de oposición, como era el caso en Brasil y en Chile. De hecho, resulta importante tener en cuenta los dos escenarios en donde tuvieron lugar los principales desarrollos que cruzaron la evolución política de la Argentina. Uno fue la constante vigilia mantenida por las Madres de la Plaza de Mayo, quienes no contaban con ninguna herramienta de lucha, salvo la atención mundial a sus recuerdos solemnes de que sus hijos habían desaparecido por cuenta de las manos militares.

También había unas pocas organizaciones de derechos humanos destacadas, las cuales contaban con presencia en el ámbito internacional, pero no alcanzaron a tener en ninguna parte la importancia y la visibilidad de las Madres, la Vicaría en Chile o la OAB en Brasil<sup>32</sup>.

Como era de esperar, las campañas de los activistas en derechos humanos argentinos se concentraron en la esfera internacional. De interés particular fue la pugna extensa y de alto nivel emprendida en las Naciones Unidas. Los activistas, respaldados por la administración Carter, se lanzaron en contra del régimen militar, el cual a su vez había orientado bastantes esfuerzos en ejercer cierto influjo en la maquinaria de las Naciones Unidas. Sirviéndose de múltiples argentinos que una vez más habían salido del país con el cambio de gobierno, los Estados Unidos, liderados por Jerome Shestak, desataron una lucha tenaz en el seno de las Naciones Unidas para ayudar a construir en dicha organización una maquinaria de los derechos humanos, con la cual se les concediera el tipo de legitimidad que ya se habían ganado en los Estados Unidos (Guest 1990). Al igual que en Chile, este esfuerzo de promoción de los derechos humanos, adentro y alrededor de Argentina, se convirtió en una base importante para que el derecho lograra construir y legitimar su papel en dicho contexto<sup>33</sup>. Pero no resulta extraño que los esfuerzos desplegados en materia de derechos humanos en Argentina no condujeran al mismo tipo de producción institucional que aquellos constatados en Brasil o en Chile.

Igualmente, aunque nuestras descripciones de las transformaciones de los regímenes militares de Brasil y de Chile revelan la presencia de sendos procesos de reconstrucción y de reorientación hacia nuevas técnicas y conocimientos especializados provenientes de los Estados Unidos, la caída del régimen militar en Argentina fue producto del fracaso rotundo

<sup>32</sup> Existía una Asamblea Permanente para los Derechos Humanos, establecida en 1975 por Raúl Alfonsín, entre otros, y luego Emilio Mignone conformó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1979, con el objeto de acceder a una postura más internacional y agresiva (Brysk 1994, 47; Guest 1990, 212; Jelin 1995, 106, 110-111). Según Guest, "el ímpetu" provino de una firma de abogados de interés colectivo radicada en Washington, el Centro para el Derecho y las Políticas Sociales. Leonard Meeker, su director, ayudó a Usaid al desarrollo de planes para invertir 87.500 dólares en favor de diferentes defensores de derechos humanos de África y América Latina. Mignone, quien era bastante admirado por la Embajada debido a sus anteriores trabajos en diferentes agencias internacionales, conoció a Meeker en Buenos Aires, y la impresión inicial fue suficiente para que se le facilitara a Mignone una ayuda financiera de 40.000 dólares con el objeto de erigir el CELS, el cual adoptó los reglamentos del Centro para el Derecho y las Políticas Sociales (Guest 1990, 509). Así, el Centro de Estudios Legales y Sociales se convirtió en la entidad de perfil jurídico más conocida en la comunidad internacional (si bien las Madres de la Plaza de Mayo, enlazadas a través de Mignone y otras personas, eran en general las que gozaban de mayor reconocimiento). Para el año 1980, Mignone "se había constituido en el abogado de derechos humanos más conocido de la Argentina" (Guest 1990, 213).

<sup>33</sup> Por ejemplo, el reporte de Amnistía Internacional sobre Argentina, publicado en marzo de 1977, fue clave para que se concediera a esta institución el Premio Nobel en octubre de dicho año (Guest 1990, 213).

en la Guerra de las Islas Malvinas/Falklands. Indudablemente, las violaciones en contra de los derechos humanos y la importancia progresiva del movimiento internacional de los derechos humanos contribuyeron a que el poder militar dejara de obtener respaldo, pero aun así, fue por causa de este evento externo que, dentro del contexto argentino, emergió un nuevo gobierno.